



Héctor Tajonar

Esbozo de un bienio

En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, citó una frase de Octavio Paz, que describe bien la situación del país: "Más que el brillo de la victoria, nos conmueve la entereza ante la adversidad".

Si algo distingue al presente gobierno es la determinación del presidente Felipe Calderón de combatir frontalmente al narcotráfico y el crimen organizado, para evitar que México se convierta en un *narcoestado*. El costo en vidas humanas de esta batalla es ya de casi ocho mil víctimas, y al final del sexenio podrían contarse en decenas de miles, como lo mencionó Ciro Gómez Leyva en su entrevista al Presidente de la República, quien respondió con firmeza: "Uno debe hacer lo que el deber le impone. Y mi deber es defender a los mexicanos de la acción de los criminales".

Además, la gravedad de la situación "pone en riesgo la viabilidad del país" —según se afirma en el análisis titulado *La Secretaría de la Defensa Nacional en el Combate al Narcotráfico*—, debido a que el narco representa "una amenaza interna, actual y violenta que afecta los campos político, económico, social y militar".

Por ello, la decisión del presidente Calderón de revertir la intolerable situación de un Estado "doblegado por el poder de los grupos criminales que conducían sus actividades delictivas (narcotráfico, secuestros y tráfico de drogas, entre las principales) con absoluta impunidad", era impostergable. No hay nego-

ciación ni claudicación posible en esta lucha por recuperar el monopolio de la violencia legítima, la cual se había perdido durante la etapa en que la delincuencia era administrada desde el poder.

La corrupción, que durante las siete décadas fue un elemento de cohesión del Estado autoritario, hoy representa la peor amenaza contra la supervivencia de las instituciones democráticas.

Los obstáculos para ganar la batalla contra el crimen organizado parecen infranqueables: mediante su inmenso poder corruptor, el narcotráfico ha logrado infiltrarse en mandos medios y altos de las instituciones policiacas y de procuración de justicia. El caso de Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la SIEDO, a quien el cártel de Sinaloa le entregaba 450 millones de dólares mensuales, es al mismo tiempo aterrador y paradigmático.

La gran pregunta es: ¿cuántos más como él; si el narcotráfico ha logrado ese nivel de infiltración en las instituciones federales, qué ocurrirá en los estados y municipios del país? Es obvio que la llamada Operación Limpieza es condición fundamental para combatir con éxito al crimen organizado. El otro factor clave es resolver la fragmentación, ineptitud y corrupción de las mil 640 corporaciones policiales del país, algunas de las cuales han sido "privatizadas por el narcotráfico" —según lo declaró el procurador Eduardo Medina Mora (*El País*, 23/11/08). Por si fuera

poco, el Ejecutivo acaba de enviar al Senado un demoledor informe en el cual se reconoce que la mitad de las policías del país "no es recomendable". El desafío es ineludible y mayúsculo.

Desde su toma de posesión, el presidente Felipe Calderón ha enfrentado la que acaso sea la circunstancia comparativamente más adversa experimentada por cualquier mandatario mexicano, desde el fin de la etapa armada de la Revolución. Sin este contexto en mente no es posible valorar con justeza el primer tercio de su mandato. Su victoria electoral por apenas medio punto porcentual, frente a un mal perdedor que optó por convertirse en un factor desestabilizador, en lugar de un adversario sensato y democrático, ocasionó una polarización política que logró erosionar la legitimidad presidencial, además de haber representado un serio obstáculo en la tarea de gobierno.

El Presidente optó por negociar con el PRI sus reformas estructurales —ISSSTE, tributaria, electoral, judicial, petrolera— con resultados muy disminuidos en todos los casos, salvo el primero. Ello convirtió al antaño partido hegemónico en la minoría decisiva en el Congreso, apuntalándolo para los comicios de 2009 y 2012. A pesar de haber terminado en una reforma parcial de Pemex, la reforma energética tuvo un efecto positivo en materia democrática: al fin el PRD decidió ejercer cabalmente su responsabilidad legislativa, lo cual tendrá consecuencias favorables en



la relación entre el Congreso y el Ejecutivo.

Si a ello se agrega la crisis económica, de la cual él no es responsable, el presidente Calderón necesitará redoblar su entereza y extenderla a todos los ámbitos de su gobierno. ■■
htajonar@artemultimedia.com.mx

Desde su toma de posesión, el presidente Felipe Calderón ha enfrentado la que acaso sea la circunstancia más adversa experimentada por cualquier mandatario mexicano, desde el fin de la etapa armada de la Revolución

